**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C.**

**SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2019 Auto Interlocutorio No.: 35

**Radicación: 110013335-017-2019-00029-00**

**Demandante: Ana Cecilia Bulla Rojas**

**Demandado: Fiscalía General de la Nación**

**Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho**

 **Impedimento**

Mediante auto del 13 de febrero de 2019 (fl. 27), se admitió la demanda y se ordenó a la parte actora enviar por correo certificado el traslado de la demanda a la demanda, Ministerio Publico y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por su parte la demandante retiró los oficios correspondientes para el traslado el 18 de marzo de 2019 (Fl.28) y allegó las constancias de envío el 26 de marzo de 2019 (Fl.30-31).

Estando pendiente el proceso para la correspondiente notificación de la demanda, advierte la titular de este Juzgado la existencia de impedimento por encontrarse configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 130 del C.P.A.C.A., como se pasa a explicar:

El 04 de febrero de 2019, la señora Ana Cecilia Bulla Rojas a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho elevó las siguientes pretensiones:

1. Que se inaplique la frase” (**…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de la cotización al Sistema General de pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”** del artículo **1°**  de los Decretos No. 0382 del 06 de marzo de 2013 y se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Radicado No. 201783100056741 del 11 de septiembre de 2018, con el que se niegan las pretensiones solicitadas en el derecho de petición de fecha 30 de agosto de 2018.
2. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución 23381 del 24 de octubre de 2018, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto mediante oficio No. 20183000055773 de fecha 04 de octubre de 2018, por medio del cual se negó la reliquidación. reajuste y pago de la totalidad de las prestaciones sociales, salariales y emolumentos laborales; incluyendo para dichos efectos la bonificación creada por el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 como factor constitutivo de salario.

 (…)

**CONSIDERACIONES**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, los Magistrados y Jueces deberán declararse impedidos, o serán recusados, en los casos señalados en el artículo 141 del C.G.P, norma que establece que son causales de recusación, entre otras, la siguiente:

1. Tener el juez, su cónyuge o compañero permanente alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso.

En punto al trámite de los impedimentos establece el artículo 131 de la Ley 1437 de 2011 que “Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el Tribunal designará Conjuez para el conocimiento del asunto”.

Al respecto se cita providencia de fecha 6 de septiembre de 2018[[1]](#footnote-1) en la que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declaró impedida para conocer de la nulidad parcial del artículo 1.° de los Decretos 0382 de 2013, 0383 de 2013, 0384 de 2013, 022 de 2014, “*Por el cual modifica el Decreto 0382 de 2013”,*  1269 de 2015, “*Por el cual modifica el Decreto 0383 de 2013”,* en tanto en ellas se establece que la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de las cotizaciones al sistema de seguridad social, lo cual hace que se tenga un interés en las resultas del proceso.

En esta providencia el Consejo de Estado estimó que el fundamento de la manifestación de impedimento se da en relación con el resultado que pueda darse en esta actuación contenciosa, pues los consejeros que conforman la Sección tendrían interés indirecto en ello, ya que al ser beneficiarios de una bonificación judicial durante el transcurrir de su vida laboral[[2]](#footnote-2), el resultado del proceso tendría una afectación directa en el establecimiento del ingreso base de liquidación (IBL) al momento de calcular la pensión de vejez de estos.

El anterior impedimento fue fundado por la Sección Tercera del Consejo de Estado[[3]](#footnote-3), al evidenciar que “el hecho revelado es constitutivo de uno de los supuestos fácticos consagrados taxativamente en el artículo 141 del Código General del Proceso, razón por la que se les apartará del conocimiento del *sub-lite”, c*onsiderando que le correspondería en principio avocar el conocimiento del proceso de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, observó la Sala que también se encontraba impedida para conocer del presente asunto al tenor de la causal contemplada en el numeral 1° del artículo 141 del CGP[[4]](#footnote-4), dado que la situación fáctica planteada por la Sección Segunda también resulta aplicable a los Magistrados que integran dicha Sección, así como del resto de Consejeros que hacen parte de la Corporación.

En este orden de ideas, para la Sección Tercera no fue dable remitir el expediente a la Sección Cuarta, por cuanto los Magistrados que la integran también se declararían impedidos para decidir sobre el caso objeto de estudio, por tal motivo, en aplicación de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, se dispuso la remisión del proceso a la Sección Segunda para que a través de su Presidencia, se llevara a cabo el respectivo sorteo de Conjuez ponente para que asuma el conocimiento del asunto en los términos del artículo 184 del CPACA”.

Siguiendo la misma lógica argumentativa se advierte en la suscrita y en todos los Jueces Administrativos un interés directo en este tipo de procesos, en tanto al compartir un régimen salarial similar, la decisión que se adopte permitiría acudir a esta jurisdicción con el objeto de reclamar análogas pretensiones soportadas en el precedente que se llegue a generar.

Aunado a ello, se pone de presente que la suscrita Juez inició demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial establecida en el Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, desde el 9 de noviembre de 2017, la cual correspondió por reparto inicialmente al Juzgado 6° Administrativo Oral de Cali bajo radicado No. 76001333300620170030100, posteriormente, el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca asignó el conocimiento del proceso a un Conjuez.

Así las cosas, se estima que en el presente caso se encuentra configurada la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 141 del C.G.P., en consecuencia, por considerar que este comprende a todos los jueces administrativos de Bogotá, Sección Segunda, se dará aplicación al numeral 2 del artículo 131 del C.P.A.C.A.

Por lo expuesto y en aras de garantizar el derecho al debido proceso, así como la correcta administración de justicia, se dejará sin valor y efecto el auto de 13 de febrero de 2019 que admitió la demanda y en su lugar, se procederá a declarar el impedimento y enviar el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que proceda al sorteo de conjuez quien deberá conocer del asunto.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda,

**RESUELVE**

**PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO** el auto calendado el 13 de febrero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO**: **MANIFESTAR IMPEDIMENTO** para conocer la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la causal 1º del artículo 150 del C. de P.C. hoy 141 del C. G. del P.

**TERCERO: REMITIR** la actuación a la Secretaria General del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que proceda al sorteo de conjuez quien deberá conocer del asunto.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**LUZ MATILDE ADAIME CABRERA**

**JUEZ**

|  |
| --- |
| **JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA**Por anotación en ESTADO notifico a las partes de la providencia anterior hoy **\_\_18 DE JULIO DE 2019\_\_\_\_** a las 8:00am.**KARENTH ADRIANA DAZA GÓMEZ**SECRETARIA |

*AP*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ****CARRERA 57 N 43-91 PISO 4 TEL 555-3939 EXT 1017** |

Bogotá D.C., 16 DE AGOSTO DE 2019

Oficio No. J 17 AD – 2019 –861

H. Magistrados

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (Reparto)**

**SECRETARÍA GENERAL**

La Ciudad

Ref. **1100133350172019 00029**

Medio de control: **Nulidad y restablecimiento laboral**

Demandante: Ana Cecilia Bulla Rojas

Demandado **Nación Fiscalía General de la Nación**

Respetados señores:

En cumplimiento del auto de fecha 17 DE JULIO DE 2019, de manera comedida y para los fines pertinentes nos permitimos remitir el expediente de la referencia.

Atentamente,



**KARENTH ADRIANA DAZA GOMEZ**

Secretaria

AP

Se anexa lo anunciado en un (1) cuaderno con 35 folios y un traslado.

1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección, Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-25-000-2018-01072-00(3845-18), Actor: MARIO WILLIAM HERNANDEZ MUÑOZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. - César Palomino Cortés: magistrado de los tribunales administrativos de Cundinamarca y el Chocó, juez primero civil del Circuito de Quibdó, juez promiscuo del Circuito de Bahía Solano y Juez Civil Municipal de Quibdó.

- Carmelo Perdomo Cuéter: magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá y Casanare, Procurador Delegado, Asesor del Despacho del Procurador General y jefe de la División Política de la misma entidad.

- Sandra Lisset Ibarra Vélez: magistrada de los Tribunales Administrativos de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

- William Hernández Gómez: Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío y Magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas.

- Rafael Francisco Suárez Vargas: Procurador Judicial II.

- Gabriel Valbuena Hernández: Jefe de la Oficina Jurídica y Secretario General (e) de la Procuraduría General de la Nación; Conjuez de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y Magistrado Auxiliar de la Sección Primera del Consejo de Estado. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E), Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). [↑](#footnote-ref-3)
4. Nota interna. Antes numeral 1° del artículo 150 del C. De P.C. [↑](#footnote-ref-4)